

REPÚBLICA DE COLOMBIA



SALA CUARTA DE DECISION LABORAL

PROCESO	Ordinario
DEMANDANTE	Benhur Gómez Pérez
DEMANDADO	AFP Porvenir S.A., Protección S.A. y Colpensiones
Vinculada	AFP Porvenir S.A.
PROCEDENCIA	Juzgado 009 Laboral del Cto. de Medellín
RADICADO	05001 3105 009 2022 00063 01
INSTANCIA	SEGUNDA
PROVIDENCIA	SENTENCIA Nro. 168 de 2023
TEMAS Y SUBTEMAS	Ineficacia de traslado
DECISIÓN	Confirma

En la fecha, **cuatro (04) de septiembre de dos mil veintitrés (2023)**, el Tribunal Superior de Distrito Judicial de Medellín, Sala Cuarta de Decisión Laboral integrada por las magistradas: María Eugenia Gómez Velásquez, Claudia Angélica Martínez Castillo y como ponente, Luz Amparo Gómez Aristizábal, procede a emitir pronunciamiento frente al recurso de apelación interpuesto por la **AFP Porvenir S.A.** y el grado especial de consulta para **Colpensiones**, ordenado en sentencia proferida por el Juzgado Noveno Laboral del Circuito dentro del proceso ordinario promovido por **Benhur Gómez Pérez**, donde también fue demandada **Protección S.A.**. Radicado único nacional 05001 3105 **009 2022 00063** 01.

La Magistrada ponente, en acatamiento de lo previsto en el artículo 13 de la Ley 2213 de 2022, sometió a consideración el proyecto discutido y aprobado mediante acta N°. **022**, que se plasma a continuación:

Antecedentes

Pretende la parte actora la declaración de ineficacia del traslado realizado del Régimen de Prima Media con Prestación Definida al de Ahorro Individual con Solidaridad a través de las AFP Protección S.A., el 01 de marzo de 2001. Como resultado de esta petición, busca que se ordene el regreso automático y sin solución de continuidad a Colpensiones, así como la condena a la AFP para que realice la devolución de las cotizaciones, bonos pensionales, sumas adicionales, junto con sus intereses y rendimientos, conforme lo establecido en el artículo 1746 del Código Civil. Además, solicita que Colpensiones reciba y contabilice esos recursos como semanas efectivamente cotizadas. Por último, se reclama la condena en costas a las entidades demandadas.

En sustento de ello afirma que, nació el 10 de octubre de 1963, al inicio de su vida laboral se afilió al extinto ISS. En marzo de 2001, un asesor de Protección S.A. lo persuadió para que se vinculara a dicho fondo, argumentando que el ISS desaparecería, lo que lo dejaría sin posibilidad de obtener una pensión. Además, le aseguraron que en dicho fondo podría jubilarse a cualquier edad y recibir una mesada superior a la ofrecida por el régimen de prima media. La decisión de trasladarse se basó en la omisión del deber de información, al no haberse suministrado acompañamiento claro, transparente, comparativo y suficiente. Alega que no se le proporcionaron cálculos ni proyecciones. Que el 17 de febrero de 2022, solicitó a Colpensiones la aceptación del traslado, negada debido a que le faltaban menos de 10 años para los 62.

Después de subsanadas las falencias advertidas por el despacho de conocimiento, en auto del **09 de marzo de 2022**, se admitió y ordenó dar trámite a la acción. Debidamente enteradas de la actuación, las entidades vinculadas por pasiva allegaron escritos de contestación así:

Colpensiones, de los hechos tiene como ciertos, la fecha de nacimiento del actor, su vinculación al régimen de prima media con prestación definida, la petición de retorno y la respuesta brindada. Los demás supuestos no le constan al ser afirmaciones ajenas a la entidad. **Se opuso** a la prosperidad de las pretensiones y formuló **las excepciones** de inexistencia de la obligación de aceptar el traslado del demandante, imposibilidad jurídica de cumplir con las obligaciones pretendidas, prescripción, buena fe e imposibilidad de condena en costas.

Protección S.A., reconoce la fecha de nacimiento del señor Benhur, su afiliación a dicho fondo el 22 de enero de 2001, aclarando que esto fue resultado de un traslado entre AFPs del RAIS, en tanto, de conformidad con la información contenida en el SIAF, es claro que el acto inicial se dio ante Horizonte. Los restantes supuestos no le constan o no son ciertos. No obstante, en su defensa, afirma que el enlace con la entidad se realizó a través de la suscripción de un formulario de manera voluntaria, sin presiones y precedido por una asesoría adecuada, correcta y suficiente, cumpliendo estrictamente con las normativas vigentes, específicamente los artículos 13 y 271 de la Ley 100 de 1993 y el Decreto 692 de 1994. Alega que se explicaron las características del RAIS y del RPM, las diferencias entre ambos regímenes, las formas de obtener una pensión en cada uno, las implicaciones del acto suscrito y todos los aspectos necesarios para que comprendiera su panorama pensional. Que se le comunicó que en el RAIS no era posible prever con exactitud el monto de la pensión debido a varios factores como la edad, los beneficiarios, la expectativa de vida, el saldo de la cuenta de ahorro individual y regulaciones de la Superintendencia Financiera y el Ministerio de Hacienda y Crédito Público. Señala que a temprana edad y sin conocer todos esos factores, no era posible predecir con precisión el monto de la mesada, ni si sería superior o inferior a la que podría recibir en Colpensiones. Sin embargo, se le dijo sobre las regulaciones vigentes en ese momento para calcular el monto probable y la posibilidad de aumentarlo a

través de rendimientos financieros y aportes voluntarios. **Resistió las pretensiones** y propuso como excepción previa la de falta de integración del litisconsorcio necesario por pasiva; y **de mérito** las de inexistencia de la obligación y falta de causa para pedir, buena fe, prescripción, validez y eficacia del traslado entre administradoras del RAIS, traslado y movilidad dentro del RAIS a través de diferentes AFP valida la voluntad de estar afiliado a dicho régimen, aprovechamiento indebido de los recursos públicos y del sistema general de pensiones, inexistencia de la obligación de devolver la comisión de administración y prima del seguro previsional por falta de causa y por afectar derechos de terceros de buena fe y la innominada o genérica.

La AFP Porvenir S.A. fue vinculada al proceso a través de proveído emitido el 19 de mayo de 2022. Luego de notificarle la demanda procedió a dar respuesta, señalando no constarle o no ser ciertos los hechos narrados por el actor. No obstante, precisa que el demandante presentó afiliación a Horizonte el 01 de abril de 1997, y que se atiene a lo registrado en el formulario, el cual evidencia su libre escogencia de régimen después de haber recibido información, clara, precisa, veraz y suficiente acerca de las condiciones, características y funcionamiento del mismo. de conformidad con las disposiciones contenidas en la ley 100 de 1993, en los artículos 60 y siguientes, por lo cual la decisión fue voluntaria e informada tal como se observa en la declaración escrita a que se refiere el literal e) del artículo 114 de la ley 100 de 1993, documento público que se presume auténtico en los términos de los artículos 243 y 244 del CGP y el parágrafo del artículo 54 A del CPT. Asevera que, para el momento del acto de traslado no existía la obligación de dejar por escrito la información proporcionada. Asimismo, destaca que debido a que se trata de un sistema público y obligatorio, las condiciones de afiliación, cambio, cotización y reconocimiento de prestaciones están completamente definidas por la ley. En este sentido, sostiene que no está permitido que las partes pacten circunstancias diferentes. **Enfrentó las pretensiones y exhibió excepciones de**

mérito tendientes a enervarlas, las que denominó: prescripción, buena fe, inexistencia de la obligación, compensación y la genérica.

La primera instancia **terminó con sentencia** proferida por el Juzgado Noveno Laboral del Circuito el 29 de junio del presente año, declarando la ineficacia de la afiliación realizada por el señor **Benhur Gómez** al RAIS, entendiéndose que siempre permaneció sin solución de continuidad en el régimen de prima media. Condeno a Porvenir S.A. y Protección S.A., a que dentro de los 30 días siguientes a la ejecutoria del fallo, trasladen a Colpensiones *"el saldo existente en la cuenta de ahorro individual del demandante el señor BENHUR GÓMEZ PÉREZ junto con sus correspondientes rendimientos financieros, frutos e intereses y los bonos pensionales si hubieren sido ya redimidos y contar con sus propios recursos deberá trasladar con indexación lo descontado por el fondo de garantía de pensión mínima los gastos de administración y el valor de primas de seguro previsional y reaseguros, al momento de cumplirse esta orden los conceptos deberán aparecer discriminados con sus respectivos valores junto con el detalle pormenorizado de los ciclos IBC, aportes y demás información relevante que los justifique."* Le ordenó a Colpensiones recibir las sumas que le sean giradas e incorporarlas como semanas válidamente cotizadas. Declaró no probada la excepción de prescripción e impuso costas a cargo de las AFPs del RAIS, fijando el monto de las agencias en derecho.

La a quo hizo referencia a las normativas aplicables al caso y a la jurisprudencia del máximo órgano de la justicia laboral ordinaria, en la que se sostiene que, al realizar un cambio de régimen, la entidad que lo promueve debe cumplir con la obligación de examinar las circunstancias particulares del afiliado, y explicar si dicho acto le beneficia. Esto implica brindar información detallada sobre las ventajas y desventajas, así como los requisitos y características de las prestaciones económicas y los regímenes involucrados, lo cual asegura que tenga un conocimiento completo de las implicaciones legales del cambio, sin que sea suficiente simplemente llenar un formulario y aseverar que el acto fue voluntario, sin que los fondos en

cuestión, para el caso, cumplieran con la obligación de probar la asesoría suministrada, a pesar de que recaía sobre ellos, lo que llevó a la decisión de declarar la ineficacia del cambio con las restituciones anotadas.

El **recurso de apelación** fue interpuesto por la apoderada de la **AFP Porvenir S.A.**, cuestionando específicamente el contenido del numeral segundo, referente a la devolución de los recursos debidamente indexados. Para respaldar su argumento, cita jurisprudencia de la Sala Laboral de la Corte Suprema que establece que este concepto es una manera de ajustar la moneda para contrarrestar la devaluación causada por la inflación a lo largo del tiempo. Sostiene que esta orden es incompatible y excluyente con las obligaciones de la Administradora de Fondos de Pensiones, que incluyen garantizar la rentabilidad mínima de la cuenta de ahorro individual. Enfatiza que los recursos de la cuenta del actor no han sido afectados por la depreciación, ya que han generado rendimientos financieros que no se habrían obtenido en el Régimen de Prima Media. Arguye que si la ineficacia del traslado implica volver al estado anterior como si el cambio nunca hubiera ocurrido, entonces las utilidades también deberían quedar fuera de la orden de retorno. Menciona que las ganancias generadas durante el periodo de permanencia en el RAIS compensan la devaluación del valor adquisitivo de la moneda que podría haber ocurrido en relación con los montos a restituir. El Tribunal Superior de Cali respalda esta visión al señalar que la indexación no es necesaria, ya que los rendimientos obtenidos superan con creces cualquier pérdida.

En favor de Colpensiones se conoce en el grado jurisdiccional de consulta.

De la oportunidad para presentar **alegaciones** hizo uso la **AFP Porvenir S.A.**, quien después de realizar un recuento de la actuación, insiste en que no se dan los supuestos para declarar la ineficacia del traslado, pues no se alegó, ni probó ninguno de los eventos previstos en el artículo 1741 del

Código Civil, ni de los vicios relacionados en el 1508 de la misma obra, y la sanción del precepto 271 de la Ley 100 de 1993 está a cargo de la autoridad administrativa, realizándose por la Sala de Casación Laboral una mixtura para decidir el tema, quedando además evidenciada la selección libre, voluntaria y sin presiones por parte del actor, sumado a que el documento contentivo de la misma no fue tachado de falso, sin que tampoco se superen los requisitos para la declaratoria de nulidad relativa o absoluta.

Advierte que también se garantizaron los derechos de retracto y libre escogencia, cumpliéndose con el deber de información exigido para la época, sin que se contemplara respaldo documental de la misma, salvo el correspondiente formulario, pidiendo un análisis crítico y conjunto de las pruebas y efectuar la diferenciación entre la ineficacia y nulidad de los actos jurídicos y sus efectos, conceptos que explica en forma detallada. Seguidamente trae a cita el concepto de buena o mala fe en las restituciones mutuas, y pide exoneración de la indexación ordenada, citando como respaldo providencia de la Sala Laboral del Tribunal Superior de Cali, ratificando la súplica de absolución para esa sociedad.

En orden a decidir, basten las siguientes,

Consideraciones:

Como hechos debidamente acreditados se tienen: la vinculación del demandante al RPM, el 28 de junio de 1985; su tránsito al RAIS a través de **Horizontes hoy Porvenir S.A.**, con formulario suscrito el 01 de abril de 1997, y posterior cambio a la **AFP Protección S.A.**, el 22 de enero de 2001. Según historia laboral aportada por Protección generada el 31 de marzo de 2022, el actor acredita un total de 1.376,58 semanas, de las cuales 169,86 fueron aportadas en otro régimen, 183,43 en otro fondo y 1023,29 en dicha entidad.

De acuerdo con el recuento realizado, los argumentos de la apelación y el grado jurisdiccional de consulta para Colpensiones, **el problema jurídico** en esta instancia se circunscribe a establecer, si hay lugar a la declaratoria de ineficacia de la inscripción del demandante al RAIS a través de **Horizonte hoy Porvenir S.A., con movilidad a Protección S.A.**, y como consecuencia de ello, a su inmersión automática en el RPM, con las correspondientes restituciones económicas, los conceptos que estas comprenden y si se debe ordenar o no su actualización mediante el mecanismo de la indexación.

Pues bien. Reiterada ha sido la línea de la jurisprudencia **mayoritaria** de la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia desde el año 2008, en torno al tema de la carencia de efectos jurídicos del traslado de régimen pensional cuando no está precedido de una suficiente, completa, clara, comprensible y oportuna información sobre las reales implicaciones de abandonar el régimen de prima media con prestación definida y sus posibles consecuencias futuras, existiendo unas reglas decantadas, entre ellas, que la movilidad debe estar precedida de la debida información y transparencia, **para el caso concreto, como los formularios se suscribieron en los años 1997 y 2001**, se estaba en la primera etapa de la regulación normativa, contenida entre otras en los arts. 13 literal b), 271 y 272 de la Ley 100 de 1993, art. 97, numeral 1º del Decreto 663 de 1993, disposiciones constitucionales relativas al derecho a la información, no menoscabo de derechos laborales y autonomía personal, y por tanto, el contenido mínimo estaba circunscrito a la **ilustración de las características, condiciones, acceso, efectos y riesgos de cada uno de los regímenes pensionales**, y suponía el análisis de la situación particular de cada afiliado ante el sistema; sin que obre prueba de la debida ilustración por parte de las **AFP** sobre el funcionamiento, diferencias entre ambos regímenes, ventajas, desventajas, forma de liquidar y modalidades de pensión en el RAIS, bajo las reglas de la normatividad vigente para tal calenda, ni del debido acompañamiento durante

el tiempo en que ha estado allí, sin que tal omisión se subsane por el transcurso del tiempo o por el tránsito entre administradoras, toda vez que,

... la actuación viciada de traslado del régimen de prima media con prestación definida al de ahorro individual, no se convalida por los traslados de administradoras dentro de este último régimen; ciertamente, la decisión de escoger entre una y otra administradora de ahorro individual, no implica la ratificación de la decisión de cambio de régimen que conlleva modificar sensiblemente el contenido de los derechos prestacionales, (ver sentencia CSJ Sala de Casación Laboral 31989 de 2008, reiterada en la SL5686-2021 y SL2693-2022, entre otras).

Lo que se reitera en sentencia SL4322-2022, así:

No tiene incidencia, en principio, el hecho de que el recurrente haya seleccionado una segunda administradora del Régimen de Ahorro Individual en el año 2012, primero, porque con ello no se está convalidando la ineficacia cuando se hizo el traslado de régimen (CSJ SL, 09 sep. 2008, rad. 31989; CSJ SL, 22 nov. 2011, rad. 33083, entre otras) y, en segunda medida, porque si se decreta el acaecimiento de tal figura, esa declaratoria afecta a todas las administradoras que se hayan sucedido desde la inicial a la cual se hizo el traslado, por cuanto la aspiración en el fondo entraña que se entienda que el afiliado permaneció en el Régimen de Prima Media, es decir, que para todos los efectos nunca lo abandonó.

Y no basta afirmar que al ser el sistema de pensiones de carácter público toda su regulación es legal y por ser así se presume su conocimiento por los afiliados, pues de un lado, se está ante un tema técnico que requiere manejo especializado, y por otro, es clara la jurisprudencia de la Sala de Casación Laboral, entre otras en sentencia SL2484-2022 cuando indica:

*... le corresponde a la administradora de pensiones acreditar el cumplimiento del deber de información, **pues exigir al afiliado una prueba de este alcance es un despropósito, en la medida que no haber recibido información suficiente corresponde a un supuesto negativo indefinido que solo puede desvirtuar el fondo de pensiones mediante la prueba que acredite que cumplió esta obligación** [1] (CSJ SL1452-2019, reiterada en CSJ SL1688-2019, CSJ SL1689-2019, CSJ SL4426-2019 y CSJ SL4806-2020).*

Asimismo, porque la documentación soporte del traslado debe conservarse en los archivos del fondo, dado que es esta entidad quien debe observar la obligación de brindar información y, más aún, probar ante las autoridades administrativas y judiciales su pleno cumplimiento.

Y es que no es razonable invertir la carga de la prueba contra la otra parte de la relación contractual, toda vez que las entidades financieras por su posición en el mercado, profesionalismo, experticia y control de la operación, tienen una clara preeminencia respecto del afiliado lego, a tal punto que la legislación considera una práctica abusiva la inversión de la carga de la prueba en disfavor de los consumidores financieros (artículo 11, literal b) de la Ley 1328 de 2009). Negrillas fuera del texto original.

Y en la SL1197-2021, señala:

Así lo es, pues en su disertación llega al punto de postular que era la accionante la que debía tener conocimiento de aquellos presupuestos, contrario a ello, debió el Colegiado considerar que el deber de información debió ser veraz, oportuno e insoslayable en este campo de la seguridad social. Las AFP tienen la imperativa obligación de brindar una asesoría suficiente, y por ello, si el afiliado alega que no fue así, como aquí ocurrió, el Tribunal debía entonces contraer su atención en elucidar si ese deber se satisfizo o no, con pruebas que lo demuestren de forma contundente, más aún, si aquella está, tal y como se indicó en el precedente transcrito, en mejor posición que los afiliados, para demostrar esas circunstancias. Negritas extra texto.

Ni de los formularios se infiere la completa ilustración, así se asevera en sentencia SL4322-2022:

Se sigue de lo anterior que el simple diligenciamiento del formulario no suple en manera alguna el deber de información, como erradamente parece haberlo entendido el Tribunal y, mucho menos, con el nivel de calidad que la jurisprudencia ha venido exigiendo, ni resulta ser demostrativo de haberse satisfecho en debida forma el mentado deber (CSJ SL1741-2021 en la que se memoraron las sentencias CSJ SL1421-2019; CSJ SL4964-2018 y CSJ SL19447-2017), ni la suscripción de ese preimpreso remueve la obligación que le asistía a las AFP de cumplir con el requisito de brindar la debida información y de probarlo en el proceso, así como tampoco lo hace la aceptación en el interrogatorio de parte del demandante de haber recibido una información, pero no con las características y profundidad debidas.

Y en la misma providencia se explica que no es posible afirmar:

... que para la época en que el demandante se trasladó, la selección del régimen pensional no tenía relación con el monto de la pensión, pues lo

que se espera al momento del traslado no es precisamente que se le informe el valor futuro de la prestación, sino que se le explique que aquella depende del capital acumulado en la cuenta individual, por lo que, las AFP como expertas en el aseguramiento de los riesgos de invalidez, vejez y muerte, cuentan con los soportes técnicos, estadísticos y actuariales para realizar proyecciones del capital que en el tiempo puede acumular el afiliado para acceder a su derecho pensional, teniendo en cuenta las condiciones particulares de cada uno al momento del traslado, como la edad, sexo, nivel de ingreso, persistencia en la cotización, etc; información con que cuenta la AFP por encontrarse registrada en el formulario de afiliación y en la historia laboral del afiliado.

*Así mismo, advierte el juzgador de alzada que la solicitud del demandante de retornar a Colpensiones no se realizó dentro de los plazos previstos, según las sentencias de la Corte Constitucional que citó en la providencia; **sin embargo, resultaría ser un desaguizado centrar el análisis en los períodos definidos en la ley para hacer traslados entre regímenes, o la limitante para realizarlo cuando le falten menos de diez (10) años para alcanzar la edad requerida, puesto que lo pretendido siempre fue la nulidad y/o ineficacia del traslado efectuado a la AFP Horizonte hoy Porvenir SA, con lo cual, se desdibujaría por parte del Colegiado de instancia el pedimento efectuado desde el escrito inaugural (CSJ SL1475-2021).*** Negrillas intencionales.

Ni se pueden invocar actos de relacionamiento como sustento de saneamiento, en el mismo pronunciamiento se dice sobre el particular:

De la misma manera, encuentra la Sala que tampoco le asistió la razón al Tribunal al sostener que actos posteriores al traslado de régimen pensional efectuado en el año 2000, de aparente asentimiento con el RAIS, o las calidades personales o profesionales del demandante acumulados a lo largo de su vida, per se, convalidaron de alguna manera el hecho de que al momento de la afiliación la AFP no cumplió con el deber que le competía, como se ha explicado a lo largo de esta providencia (CSJ SL 3349-2021).

Y en sentencia SL1055-2022, se expuso:

Pues bien, como se explicó en las sentencias CSJ SL5686-2021 y SL5688-2021, los argumentos de esta índole son inadmisibles pues desatienden que el eje central de estas discusiones está en determinar si al momento del traslado de prima media al RAIS la persona contó con información suficiente para tomar esa decisión. En este sentido, los actos u omisiones posteriores del afiliado, bien sea porque se trasladó entre fondos privados o no retornó a prima media en las oportunidades legales previstas, no pueden validar el desacato legal que genera la ineficacia del acto jurídico del traslado de régimen, precisamente porque al ser posteriores dejan intactos los hechos u omisiones que anteceden al acto jurídico ineficaz, el cual no puede sanearse como la nulidad.

De modo que no es dable siquiera sugerir que los posteriores traslados entre administradoras pueden configurar un acto de relacionamiento capaz de ratificar la voluntad de permanencia en ellas, como se infiere de las decisiones de la Sala de Descongestión de esta Corte CSJ SL249-2022 y SL259-2022. Nótese que, conforme la perspectiva explicada, esa voluntad de permanencia en el RAIS es inane dado que no desvirtúa el incumplimiento del deber de información y además ubica la discusión en actuaciones que estarían respaldadas en un acto jurídico ineficaz, esto es, el del traslado inicial.

Justamente lo anterior explica que la acción para demandar estos asuntos no sea la de nulidad -como también lo sugieren de forma equivocada aquellas providencias- sino la de ineficacia, en la cual, se reitera, lo relevante es determinar, sin más agregados, si la persona al momento de suscribir el acto de traslado de régimen pensional ha sido debidamente informada sobre las ventajas, desventajas y consecuencias de su traslado y permanencia en el RAIS.

Por tanto, nuevamente se enfatiza que este es el precedente vigente y en vigor de la Sala de Casación Laboral de esta Corte, y recoge cualquier otro que le sea contrario, en especial el condensado en aquellas providencias.

Reiterándose en sentencia CSJ SL1442-2021 que memoró el fallo CSJ SL12136-2014, que la información precisa, es un elemento esencial para pregonar que hubo *libertad* en la toma de la decisión, lo cual supone, necesariamente, el conocimiento de las consecuencias positivas y negativas de su acogimiento, acarreando su inobservancia **la ineficacia del acto de traslado de régimen en los términos de los artículos 13 literal b) y 271 de la Ley 100 de 1993, lo que implica que:**

... las cosas vuelven a su estado anterior, de manera que la administradora tiene que asumir los deterioros del bien administrado, pues la ineficacia se declara como consecuencia de la conducta del fondo, al haber incurrido en la omisión de brindar la información adecuada, oportuna y suficiente al afiliado, quien tenía derecho a recibirla, no de forma gratuita, sino con cargo a la comisión de administración de aportes obligatorios y comisiones por buen desempeño que se descuentan de la cotización y de su ahorro, deducción autorizada por el artículo 104 de la Ley 100 de 1993, subrogado por el artículo 53 de la Ley 1328 de 2009 y que permite el literal q) del artículo 13 de la Ley 100 de 1993, adicionado por el artículo 2 de la Ley 797 de 2003, al disponer: Los costos de administración del sistema general de pensiones permitirán una comisión razonable a las administradoras y se determinarán en la forma prevista en la presente Ley.

Por tal razón, esa declaratoria obliga a las entidades del RAIS a devolver todos los recursos acumulados en la cuenta de ahorro individual del titular, ya que los mismos serán utilizados para la financiación de la prestación pensional a que tenga derecho el afiliado en el régimen de prima media con prestación definida. Ello, incluye el reintegro a Colpensiones del saldo de la cuenta individual, sus rendimientos y los bonos pensionales, los valores cobrados por los fondos privados a título de gastos de administración y comisiones, incluidos los aportes para el fondo de garantía de pensión mínima y las primas de los seguros previsionales, sumas debidamente indexadas, pues, desde el nacimiento del acto ineficaz, estos recursos han debido ingresar al RPMPD administrado por Colpensiones (CSJ SL2877-2020. Reiterada en la SL843-2022). Negrillas intencionales.

Por ser el precedente vigente, es el acogido por esta Sala de Decisión, **se confirma la declaratoria de ineficacia de la vinculación del demandante al RAIS y su cambio de administradora.**

En lo atinente a los rubros a devolver, su actualización mediante el mecanismo de la indexación, y **la obligación de las AFP de asumir lo descontados por gastos de administración, seguros previsionales y garantía de pensión mínima con su propio patrimonio**, surgen, entre otras, a partir de las sentencias **SL3202-2021, SL3706, SL3707, SL3708, SL3710, SL3349-2021, SL4803-2021, SL4609-2021** reiteradas, entre otras en las **SL755-2022, SL756-2022, SL843-2022, SL1019-2022, SL1055-2022, SL2484-2022, SL4322-2022 y SL554-2023**, sin que sea una decisión caprichosa, **pues como ya se advirtió se acata el precedente vertical reiterado en más de 3 providencias que constituyen doctrina probable.**

Desde este punto de vista, no se estaría generando enriquecimiento sin causa en favor de COLPENSIONES o del demandante, y tampoco doble condena o un desmedro de los fondos, ya que se trata de la reivindicación de unas sumas que integran la cotización y que deben dirigirse a la administradora a la que ha pertenecido siempre sin solución de continuidad,

máxime que fue la conducta de las AFP la que generó la ineficacia aquí declarada.

Por lo que se **confirma** la sentencia revisada en cuanto ordenó a la **AFP Protección S.A.**, reintegrar a Colpensiones, además del saldo de la cuenta de ahorro individual del demandante con los rendimientos financieros, los valores descontados por **gastos de administración, seguros previsionales y porcentaje aplicado a garantía de pensión mínima, estos tres debidamente indexados y con cargo a sus propios recursos, últimos conceptos – actualizados a la fecha del reembolso-**, que también se hacen extensivos a la **AFP Porvenir S.A.**, cada administradora por el tiempo de vigencia de la afiliación del señor Benhur Gómez. Así mismo se avala lo resuelto en cuanto a que al momento de cumplirse la orden impartida en cuanto a restituciones, deberá remitirse a Colpensiones relación discriminada de los conceptos, con sus respectivos valores, junto con el detalle pormenorizado de los IBC, aportes y demás información relevante que los justifiquen.

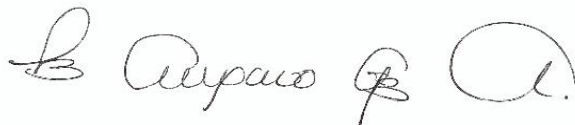
Las costas en esta instancia quedan a cargo de la AFP Porvenir S.A. a quien se desata adversamente el recurso. Las agencias en derecho se fijan en la suma de \$1.160.000,00 a favor del demandante.

En mérito de lo expuesto, la **Sala Cuarta de Decisión Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial Medellín**, administrando Justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, **confirma** la sentencia proferida por el Juzgado Noveno Laboral del Circuito dentro del proceso ordinario promovido por **Benhur Gómez Pérez**, contra las **AFP Protección S.A., Porvenir S.A. y Colpensiones**.

Costas en esta instancia a cargo de la AFP Porvenir S.A., a quien se desata adversamente el recurso. Las agencias en derecho se fijan en la suma de **\$1.160.000,00 a favor del demandante.**

Lo resuelto se notifica a las partes por **EDICTO**, que se fijara por **secretaria por el término de un día**, en acatamiento a lo dispuesto por la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia en auto AL2550-2021.

Las magistradas (firmas escaneadas)



LUZ AMPARO GÓMEZ ARITIZABAL



MARÍA EUGENIA GÓMEZ VELÁSQUEZ



CLAUDIA ANGÉLICA MARTÍNEZ CASTILLO